

jir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, pide á ésta 1ª Sala se sirva darlo por revisado.—México, 9 de Abril de 1874.—*García Ramírez.*

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 10 de 1874.—Por revisado, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca. —*José M. Iglesias.* —*Pedro Ogazon.*—*Juan S. de la Garza.* —*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia. México, Abril 30 de 1874.—*Alejo Gomez Eguiarte,* oficial segundo.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Loaiza y Bustamante, Irigoyen y Escobosa, Baston Hermanos, Sandoval y Bulle, Isaac Coppel y Francisco A. Aguilar, vecinos de Guaymas, contra el Administrador de rentas del Estado, que fundándose en una ley anticonstitucional, les hace el cobro del derecho de consumo segun la cuota señalada en dicha ley, para el comercio de Guaymas especialmente.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Que ha examinado con el mayor detenimiento el presente juicio de amparo promovido por los Srs. Sandoval y Bulle, Baston Hermanos, Loaiza y Bustamante, Irigoyen y Escobosa, Isaac Coppel y Francisco A. Aguilar, comerciantes y vecinos de este Puerto, en el

que se quejan de las cuotas que respectivamente les han impuesto y exige el C. Administrador de rentas de esta ciudad, por derecho de consumo á efectos extranjeros nacionalizados, tal y como lo dispone la ley de clasificacion de rentas decretada por el Congreso del Estado en 4 de Diciembre próximo pasado. El que suscribe no puede menos que apoyar la solicitud de los quejosos por las razones legales en que se fundan y exponen en el escrito de queja, y que en nada contradice el empleado ejecutor, las que convencen de la justicia que les asiste. Cuestion es esta que ya se ha debatido en algunos tribunales de la federacion, y los que en casos análogos han decretado el amparo y confirmándose por el Supremo Tribunal de la Nacion, y cuyas ejecutorias se encuentran publicadas en el Semanario Judicial (tomo 2º páginas 334, 335, 386 y 387; tomo 3º, 406 y 407,) las que ponen por principal considerando que, á las legislaturas de los Estados les está prohibido (fraccion 1ª art. 112 de la Constitucion general) imponer impuestos ó contribuciones sobre importacion, lo que siempre debe respetarse no obstante la libertad que tienen para dictar leyes para su régimen interior, por que conforme el artículo 41 del mismo Código, en ningun caso pueden contravenir á las estipulaciones del pacto federal. No hay duda que el impuesto referido de consumo aunque sea á efectos extranjeros nacionalizados es inconstitucional, porque es verdaderamente un recargo á la importacion extranjera hecha por la ley citada del Estado sin el consentimiento del Congreso general, consentimiento que es un requisito indispensable conforme el artículo citado 112 de la Constitucion de la República; y como al cobrar tal derecho se violan las garantías que otorga la carta fundamental en sus arts. 13 y 16 y que invocan los solicitantes, concluye el fiscal pidiendo se decrete el amparo de conformidad y con arreglo á las fracciones 1ª y 2ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Guaymas, Febrero 6 de 1874.—*Lic. José Monteverde.*

Es copia de su original que certifico.  
Guaymas de Zaragoza, Marzo 5 de 1874.  
—*Lic. José Monteverde.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guaymas, Febrero 27 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por los CC. Loanza y Bustamante, Irigoyen y Escoboza, Baston Hermanos, Sandoval & Bülle, Isaac Coppel y Francisco A. Aguilar, de esta vecindad y comercio, contra el cobro que les hace la Administracion de rentas de este Puerto del derecho de consumo, impuesto al comercio del mismo por el art. 19 fraccion 4ª de la ley de clasificacion de rentas del Estado, núm. 14 fecha 4 de Diciembre del año próximo pasado, y reglamentado por el Gobierno en 20 del propio mes y año, por considerar violadas los quejosos con tal acto, las garantías individuales que los aseguran los arts. 13 y 16 de la Constitucion general, é invadida por dicha disposicion la esfera de la autoridad federal, infringiéndose el art. 112 del mismo Código fundamental en su fraccion 1ª, el informe de la autoridad ejecutora, apoyado únicamente en el texto de la citada ley, y su reglamento, los cuales acompaña el pedimento fiscal relativo fundando la anticonstitucionalidad del acto reclamado; los últimos alegatos de las partes; la citacion para sentencia con cuanto mas consta de autos, y considerando: Que la fraccion 4ª de la repetida ley de clasificacion de rentas del Estado, dictada exclusivamente para los comerciantes de esta ciudad de Guaymas, estableciendo respecto de ellos una excepcion en la regla general que fijó el derecho de consumo en un ocho por ciento, y cuotizándolos con cantidad determinada, al aplicarse á los quejosos tiene en efecto todo el carácter de una ley privativa. Que la naturaleza del referido impuesto es sin duda

TOMO VI.—PARTE II.

alguna el de un derecho ó contribucion sobre la importacion, pues aunque se exige á los efectos despues de nacionalizados, sirve de base para su cobro la importacion misma ó los efectos importados, convirtiéndose así en un positivo aumento de los derechos de aquella. Que los Estados no pueden, sin permiso del Congreso de la Union, imponer tales derechos ó contribuciones.

Que en apoyo de las dos anteriores consideraciones, es de citarse la opinion conforme de la respetable comision nombrada por el Ejecutivo federal, para presentarle un proyecto de reformas al Arancel vigente, la cual se expresa sobre este punto en los términos siguientes: "La comision juzga que los Estados no tienen facultades para cobrar derechos de consumo á las mercancías extranjeras sin consentimiento del Congreso de la Union, por encontrarse esta prohibicion comprendida entre las que establece el art. 112 de la Constitucion federal, la cual enumera ademas en el 72, como facultad exclusiva del Congreso de la Union, la de expedir aranceles sobre el comercio extranjero." (Memoria del Ministerio de Hacienda doctrina núm. 2 página 17.)

Que no puede tampoco entenderse concedido á los Estados generalmente ese permiso por la ley de 31 de Mayo de 1872, en la fraccion 1ª de su único artículo, que derogó los arts. 19 y 83 del citado Arancel, porque en la misma fraccion se ve el objeto exclusivo de dicha derogacion, á saber, dejar subsistente el referido derecho de consumo en el Distrito federal y Territorio de la Baja California, fijándolo en el 6 por ciento de los de importacion y dividiéndolos entre la Federacion y el Municipio respectivo. Que en consecuencia de lo expuesto, el cobro de que se quejan los peticionarios, viola las garantías individuales que invocan, é invade la esfera del Poder federal.

Con tales fundamentos y el del artículo 101, fracciones 1ª y 3ª de la Constitucion y los 13 y 27 de la ley orgánica de 20 de

Enero de 1869, este Juzgado falló: 1º: La Justicia de la Union ampara y protege á los CC. que promovieron este recurso, contra el cobro que del derecho de consumo, decretado por la ley de clasificacion de rentas del Estado, fecha 4 de Diciembre último, les hace el C. Administrador de rentas de este Puerto. 2º Notifíquese, publíquese en los periódicos del Estado y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito de Sonora así lo decretó definitivamente, firmándolo con los testigos de su asistencia ordinaria.—*D. Elias G.*—*A. P. del Rincon.*—*A. Pastor Rodriguez.*

Es copia de su original que certifico.  
Guaymas, Marzo 3 de 1874.—*D. Elias G.*  
—*P. del Rincon.*—*Pastor Rodriguez.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo que promovieron ante el Juzgado de Distrito de Sonora los Sres. Loarza y Bustamante, Irigollen y Escoboza, Baston Hermanos, Sandoval y Bulle, Isaac Coppel y Francisco A. Aguilar, vecinos de Guaymas, contra el Administrador de rentas del Estado, que fundándose en una ley anticonstitucional, les hace el cobro del derecho de consumo segun la cuota señalada en dicha ley, para el comercio de Guaymas especialmente. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito y considerando: que siendo en realidad el derecho llamado de consumo con que se gravan los efectos extranjeros nacionalizados, un recargo á los derechos de importacion que solo tiene derecho de asignar segun la Constitucion federal, el Congreso de la Union ó los Estados á quienes este Supremo Poder lo haya expresamente permitido; que de la ley de 31 de Mayo de 1872, que de-

rogó los artículos del Arancel vigente en que se consignaba la prohibicion absoluta á los Estados de gravar las mercancías importadas, no los ha dispensado del requisito exigido por la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion, puesto que el permiso de que habla dicha fraccion, debe ser expreso, tanto por la influencia gravísima que puede tener sobre el comercio exterior, como porque para otorgarlo, es preciso tener en cuenta circunstancias peculiares á cada Estado que lo solicite; que en consecuencia, no estaba en las facultades de la Legislatura de Sonora decretar la fraccion 3ª del artículo 1º de la ley de clasificacion de rentas del Estado, estableciendo el impuesto de 8 por ciento de consumo á los efectos extranjeros nacionalizados; que tampoco pudo decretar en la fraccion 4ª de la misma ley, la cuota especial con que los comerciantes de Guaymas debían cubrir este impuesto, por que eso importaba una determinacion privativa, prohibida por el Pacto fundamental; que en consecuencia, han sido violadas las garantías consignadas en los artículos 13 y 16 de la Constitucion federal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se decretó: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que ampara á los solicitantes Loarza y Bustamante, Irigollen y Escoboza, Baston Hermanos, Sandoval y Bulle, Isaac Coppel y Francisco A. Aguilar.

Devuélvase los autos al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el To- ca. Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamira-*

no.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 2 de 1874.—Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan contra Pedro Perez y Maria Timotea Rodriguez, por circulacion de moneda falsa.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En 5 de Setiembre del año próximo pasado, se comenzó á instruir la presente causa por el alcalde 2º de la Villa de Huango, contra Pedro Perez y Maria Timotea Rodriguez, denunciados como circuladores de moneda falsa. Despues de practicadas todas las diligencias conducentes á la averiguacion del hecho, así como las pedidas por este Ministerio en 10 de Octubre del mismo año hasta quedar la presente causa en estado para sentencia, resultan únicamente en contra de los presuntos reos, la declaracion de Juan Concho que asegura á la foja 5 haberles vendido unos sarcillos de plata en dos y medio reales, de los cuales salió uno de cobre; la de Jesus Lopez que á la citada foja vuelta dice que en el mismo día le compraron los expresados real y medio de carne con moneda falsa, y la de Feliciano Lopez quien á la foja 6 depono, que Perez le compró cuartilla de pan, pagándole con medio de cobre.

Estas monedas fueron entregadas por los denunciantes á la autoridad respectiva, y son las mismas que obran en la causa como cuerpo del delito; pero sin haber sido reconocidas por los acusados, ni mucho menos habérseles encontrado á estos moneda alguna. En sus preparatorias estuvieron negativos, y de los carcos que se practicaron

nada resultó justificado en su contra. El cargo pues que á este respecto se hizo á los presuntos reos, no está en manera alguna fundado, por que no existen las pruebas que son indispensables para la calificacion del hecho.

Desde luego se descubre que el caso no está comprendido, aún en el supuesto de la justificacion del cargo, ni en la primera, ni en la segunda parte del artículo 674 del Código penal, porque no existe acreditado que los presuntos reos hubiesen estado de acuerdo con el que fabricó ó alteró la moneda, así como tampoco que á sabiendas la hubiesen circulado, sin obrar de conformidad con aquel acuerdo.

Para este segundo caso es muy terminante el artículo 675 del citado Código que determina la regla á la cual debe ajustarse para presumir el acuerdo del que circula con el que fabrica, y deducir de aquí la responsabilidad para los efectos de la pena. Aquí no se encuentra justificado que los presuntos reos sean cambistas, ni que en un solo acto hayan dado seis ó mas monedas falsas del mismo cuño, ni por último se ha probado que hayan hecho uso alguna otra vez, á sabiendas, de moneda falsa ó alterada.

En esta virtud, y con fundamento de la ley 26 título 19 partida 7ª, el C. Promotor pide se absuelva del cargo hecho á los presuntos reos; y por cuanto á que aparece de las diligencias de fojas 21 y 22, que los mismos viven en amaciato desde hace mucho tiempo sin haber contraido matrimonio con arreglo á las leyes, pide juntamente el Promotor, que compulsado testimonio de lo conducente, se remita este al Juez de Letras de Puxándiro, para que proceda á lo que hubiere lugar, dándose por citado el que habla para la sentencia que deba pronunciarse por este Juzgado.

Morelia, Enero 28 de 1874.—N. Caballero.—Una rúbrica.

Es copia. Morelia, Febrero 6 de 1874.—Isidro Aleman.